un ejemplo de esta actitud, en las postremerías de su vida

**LA COTIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y EL USO DEL DOMINIO PUBLICO**

Héctor Masnatta, 2001

*“Trabajar, a dónde? Extender la mano
pidiendo al que pasa limosna, porqué?”*

Pan, tanto de Celedonio Flores (1932)

El art 20 de la Constitución Nacional permite distinguir entre derechos civiles y políticos. Entre los primeros, el derecho a la vida (art 29), a trabajar (art 14), al seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles y acceso a una vivienda digna (art 14 bis).

La reforma de 1994 amplió el catálogo de dos maneras: por un lado, incluyó derechos de protección especial para las mujeres, niños, ancianos, discapacitados e indígenas (art 75 inc 17 y 23). Por otro lado, al constitucionalizar diversos tratados con jerarquía superior a las leyes (art 75 inc 22) dió plaza a los derechos que emergían de los mismos.

Por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art. 6 incorporó explícitamente el derecho a la vida como inherente a la persona humana; por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce el derecho a trabajar, que comprende que cada persona tenga la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo (art 6). El art 11 inc d el derecho a un nivel de vida para todo individuo y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda

adecuada y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Su inc. 3 reconoce el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre. Estos y otros derechos sociales no son, como dicen voces intencionadas, un catálogo de ilusiones, sino pretensiones jurídicas sustanciales y emanación de la justicia social, con el mismo rango de los derechos individuales, y merecedores de la misma tutela.

La Nueva Constitución, sin descartar su función garantizadora de los primeros, consagró cláusulas y principios respecto a las relaciones económicas y sociales, a los instrumentos para las transformaciones y el desarrollo productivo. Léase el inciso 18 del art 75: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.

No se ha escuchado, en los abundantes paneles que analizaron los acontecimientos recientes (cortes de calles y rutas, ocupación de lugares públicos) que jurista alguno se hiciera cargo de la incidencia que pudieran tener los eventuales derechos de los “piqueteros”. Sí, en cambio, pudieron oírse llamados a actuar por los derechos del circulación violados, incluso reclamando la aplicación del Código Penal.

Conviene, a veces, repasar nociones olvidadas. En Roma, entre las cosas fuera del comercio, figuraban las cosas afectadas al uso de todos los ciudadanos (res públicas), como las calles y plazas. Este rasgo se mantuvo: tales cosas pasaron a formar el dominio público, caracterizado por estar

destinado directa e inmediatamente a una colectividad dada. De eso –su destino- resulta el carácter dominial que tiene como elemento esencial el fin. Cuando el Código Civil argentino se ocupa del dominio público, reconoce que se le atribuye al pueblo, no al Estado. Las personas particulares tienen el uso y goce (jus utendi) pero están sujetas a sus disposiciones (art 234) y a las ordenanzas generales o locales (Corte Suprema, “Fallos 30-443”)

Podría parecer poético que un sujeto heterogéneo, desplazado del taller -en el que los clásicos del socialismo vieran la matriz de la solidaridad- recupera como ámbito de organización, las res públicae, inicialmente territorio de su protesta. Hombres, mujeres y niños, con creciente responsabilidad por un orden propio que se dan y que mantienen, repristinan el ejercicio de un viejo derecho y paulatinamente lo compatibilizan con el derecho de los demás al uso del mismo dominio público (por ejemplo, ocupando media calzada para que circulen vehículos, etc)

Los Tratados que hemos citado, junto a la declaración de los derechos mencionados, contienen la obligación de los Estados -parte en promoverlos y tutelarlos-: ante la inacción de los compromisos cabe reconocer que hace para los derechohabientes una pretensión jurídica, relación de derecho público a obtener la actividad de esos Estados. En la experiencia reciente, la metodología ha implicado, indudablemente, la afectación de otro derecho constitucional: el derecho de locomoción de terceros. Hay aquí, claramente, un conflicto entre derechos humanos.

Para quienes, como nuestra Corte Suprema en “Cuello” (Fallos 255.193) se aprenderán todas las normas constitucionales como del mismo nivel, el conflicto se

resuelve con la armonización. Pero si la cohabitación no es posible (verbigracia "Portullo", pugna entre la libertad de cultos y el servicio militar) se dará cabida a la preferencia, a través de una interpretación sistemática.

Para quienes pensamos que no todos los derechos humanos tienen la misma valoración -el derecho a la vida, que da sustento a los demás, es fundante y superior- cada caso debe resolverse atendiendo a las concretas situaciones de especie, sin pagar tributo a premisas genéricas.

Quienes privilegian el sesgo liberal darán -han dado- primacía a los derechos individuales que expresan los corolarios del capitalismo tout court. Quienes adhieren a las orientaciones sociales, serían tributarios de los derechos que encargan las pretensiones de solidaridad política, económica y social, con anclaje en el capitalismo maduro. Pero todos no deberán olvidar que incluso el Código Penal liberal admite el hurto famélico, que el tango escrito en la década infame ejemplifica con aterradora actualidad.